

INFORME PRELIMINAR
OPACIDAD INSTITUCIONAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN: BALANCE A
UN MES DEL SISMO EN VENEZUELA
(24 de junio – 24 de julio de 2026)

Resumen

1.- Datos Técnicos y Geográficos del Evento Sísmico

- **Fecha y hora:** 24 de junio de 2026, a las 6:04 p. m.
- **Naturaleza:** Dos movimientos telúricos de alta intensidad consecutivos.
- **Primer sismo:** Magnitud 7,2, epicentro a 25 km al este de San Felipe, estado Yaracuy.
- **Segundo sismo:** Magnitud 7,5, ocurrido apenas 39 segundos después del primero.
- **Brecha institucional:** El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) catalogó el fenómeno como un “doblete sísmico”. Al 24 de julio de 2026, Funvisis no asume el término en su portal web ni en sus infografías oficiales, donde titula el evento como “Actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026”.

2.- Brecha de Datos: Cifras Oficiales vs. Cifras Internacionales:

Al cumplirse un mes del evento, el contraste de balances evidencia el rezago informativo de las fuentes oficiales frente a los registros internacionales:

- **Personas Fallecidas:** Cifra Oficial: 3.685 decesos reconocidos | Cifra OCHA: 5.398 fallecidos registrados.
- **Personas Heridas:** Cifra Oficial: más de 16.700 lesionados | Cifra OCHA: 16.740 heridos reportados.
- **Personas sin Vivienda:** Cifra Oficial: **No publicado en la web** | Cifra OCHA: 17.907 damnificados.
- **Población en Necesidad:** Cifra Oficial: **No publicado en la web** | Cifra OCHA: 1,3 millones en necesidad urgente.
- **Edificaciones Afectadas:** Cifra Oficial: **No publicado en la web** | Cifra OCHA: 856 afectadas (190 colapsadas).
- **Pérdidas Materiales:** Cifra Oficial: **No publicado en la web** | Cifra OCHA: 37.000 millones de dólares.
- **Réplicas Registradas:** Cifra Oficial: 1.445 réplicas acumuladas | Cifra OCHA: Más de 1.463 réplicas.
- **Personas Rescatadas:** Cifra Oficial: 6.462 rescatadas con vida (*dato acumulado y pausado*) | Cifra OCHA: Sustentado en partes de cuerpos de salvamento.

3. Indicadores de Opacidad, Censura y Control Institucional

- **Riesgo Ambiental:** El 100% de los expertos denuncia información oficial incompleta. El Estado niega el acceso a datos técnicos base en La Guaira, que concentra el 75% de las afectaciones geológicas.
- **Censura Hospitalaria:** El 70% del personal de salud siente temor a declarar por miedo a represalias. Al 60% de los recintos asistenciales se les prohibió el acceso a periodistas independientes.
- **Secretismo Presupuestario:** El 90% de los hospitales mantiene una opacidad absoluta sobre compras de emergencia y asignaciones presupuestarias extraordinarias.
- **Coerción Comunitaria:** El 17,4% de las comunidades reportó amenazas de funcionarios (como el retiro de las bolsas CLAP) para evitar que fotografíen infraestructuras colapsadas. Esto genera un efecto inhibición al denunciar en el 91,3% de la población.
- **Silencio Administrativo:** Las solicitudes de información enviadas el 17 de julio de 2026 a los ministerios de Salud y Ecosocialismo no han recibido respuesta.

4. Infraestructura y Cerco de Medios

- **Estado La Guaira:** Pérdida absoluta por colapso de sedes y antenas en *RNV (Dial 107)*, *Enlace RV* (afectada por incendio) y *Radio Urimare*. *Radio Coral* inoperativa por daños parciales. Diario *La Verdad de Vargas* opera con restricciones por daños en su sede del Casco Histórico.
- **Estado Carabobo:** Entre 34 y 40 trabajadores radiales afectados. Las emisoras *Éxitos 93.1* y *La Mega 96.5* se encuentran inactivas en sus estudios principales y en proceso de reubicación por fallas estructurales.

5. Servicios Básicos e Incomunicación Post-Terremoto

- **Energía Eléctrica:** El 95,7% de los ciudadanos carece de cronogramas de racionamiento de Corpoelec. El 21,7% padece apagones superiores a las 12 horas continuas.
- **Apagón en Conectividad:** Para la señal móvil el 60,9% tiene señal intermitente y el 21,7% tiene señal normal; mientras que para el internet fijo el 56,5% lo reporta inestable y el 30,4% inoperativo.
- **Agua Potable:** En el 43,5% de las comunidades el agua llega sin condiciones de potabilidad. Un 13% presenta corte total por tuberías. Hidrocapital no ha difundido reportes técnicos.

I. Contexto

El 24 de junio de 2026, a las 6:04 de la tarde, Venezuela registró un movimiento telúrico de alta intensidad. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó el fenómeno natural a través de dos alertas institucionales **consecutivas y por separado**: la **Nota Informativa ID 2915** detalló el primer movimiento de magnitud 7,2 con epicentro ubicado a 25 kilómetros al este de San Felipe, estado Yaracuy ubicado al centro occidental del país¹; mientras que la **Nota Informativa ID 2914** registró el segundo evento de magnitud 7,5 ocurrido apenas 39 segundos después².

Hasta la fecha, **no existe un comunicado oficial, nota de prensa web ni infografía diseñada por Funvisis que asuma explícitamente el término "doblete sísmico"**. En los mapas oficiales de sismicidad publicados por el ente, el fenómeno es titulado estrictamente como *“Actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026”* y *“sismicidad acumulada”*. Esta catalogación técnica de “Doblete” fue identificada externamente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)³.

El 24 de junio de 2026, Delcy Rodríguez no ofreció un balance oficial de personas fallecidas, desaparecidas, lesionadas ni una cuantificación de daños estructurales a consecuencia de los sismos; por el contrario, declaró acerca de las medidas de contingencia inmediatas, a saber: decretó el estado de emergencia, creó el Estado Mayor, suspendió las actividades, y convocó al personal médico del país. En esta declaración inicial no definió planes de acción para las personas refugiadas, la ubicación de centros de acopio ni las funciones asignadas a los cuerpos de orden del Estado.

Al 24 de julio de 2026, al cumplirse un mes del evento natural, los datos oficiales emitidos por el Estado de Venezuela registran un balance de 3.685 personas fallecidas reconocidas y un total de 16.700 personas heridas⁴ y el registro acumulado de la Fundación Venezolana

¹ **Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)**. (24 de junio de 2026). *Sismo de magnitud 7,2 se registró hoy en San Felipe*. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Nota Informativa ID 2915. Disponible en: <http://www.funvisis.gob.ve/noticia.php?id=2915>

² **Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)**. (24 de junio de 2026). *Sismo de magnitud 7,5 se registró hoy en San Felipe*. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Nota Informativa ID 2914. Disponible en: <http://www.funvisis.gob.ve/noticia.php?id=2914>

³ **U.S. Geological Survey (USGS)**. (24 de junio de 2026). *M 7.5 - 16 km SW of Morón, Venezuela: Tectonic Summary & Executive Review*. Comprehensive Earthquake Catalog. ANSS Advanced National Seismic System. Disponible en: <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zp/executive>

⁴ **Telemetro (EFE)**. (8 de julio de 2026). *Terremotos en Venezuela dejan 3.685 muertos y más de 16.700 heridos*. Corporación Medcom Panamá. Disponible en: <https://www.telemetro.com/internacionales/terremotos-venezuela-dejan-3685-muertos-y-mas-16700-heridos-n6084500>

de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabiliza un total de 1.445 réplicas asociadas al fenómeno telúrico⁵.

Por otro lado la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, indicó que Venezuela atraviesa un escenario complejo al tener más de 1.463 réplicas. Hasta la fecha el acontecimiento natural deja un saldo de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas, 17.907 sin vivienda, 856 edificaciones afectadas (190 colapsadas) y 1,3 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria urgente, con daños materiales estimados en 37.000 millones de dólares⁶. OCHA, Venezuela atraviesa un escenario complejo al tener más de 1.463 réplicas⁷.

A la devastación física se suma una respuesta estatal tardía, los equipos de rescate actuaron 48 horas después. El Ejecutivo no ha presentado planes de contingencia ni ejecuciones presupuestarias sectoriales (salud, ecosocialismo). Mientras en algunos sectores de La Guaira persisten fallas de conectividad que obligan al uso de soluciones satelitales privadas, la vocería oficial insiste en un restablecimiento casi total de los servicios, acentuando la desinformación de la población.⁸

Es por esto que este informe preliminar hace un levantamiento de información donde se recopila datos sobre las vulneraciones al derecho a la información pública, y el derecho a la libertad de expresión durante el primer mes del movimiento sísmico en Venezuela, considerando como base del análisis el principio de **máxima publicidad**.

Considerando esto y los artículos 57, 58 y 143 de la Constitución Nacional el pasado 17 de julio de 2026 la organización realizó dos solicitudes de información a los ministerios de Salud y Ecosocialismo solicitando detalles técnicos de los planes de atención, presupuesto

⁵ **Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)**. (24 de julio de 2026).

Observatorio Nacional de Sismos: Monitor en línea de la actividad sísmológica nacional. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Disponible en:

<http://www.funvisis.gob.ve/monitor.html>

⁶ Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). *Terremotos en Venezuela: Reporte de situación #29* (22 de julio de 2026). Reporte técnico que consolida el balance oficial y la evaluación de daños tras los sismos del 24 de junio, registrando 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y afectaciones estructurales multisectoriales en el país. Disponible en: <https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/terremotos-en-venezuela-reporte-de-situacion-29-22-de-julio-de-2026-hora-0900-pm>

⁷ Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). *Terremotos en Venezuela: Reporte de situación #29* (22 de julio de 2026). Reporte técnico que consolida el balance oficial y la evaluación de daños tras los sismos del 24 de junio, registrando 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y afectaciones estructurales multisectoriales en el país. Disponible en: <https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/terremotos-en-venezuela-reporte-de-situacion-29-22-de-julio-de-2026-hora-0900-pm>

⁸ El Diario. *Gobierno encargado aseguró que se ha recuperado el 96 % del servicio eléctrico en La Guaira* (9 de julio de 2026). Nota periodística que recoge los voceríos oficiales sobre la restitución del servicio eléctrico en el litoral central, en contraste con los reportes de incomunicación y fallas de conectividad que persisten en la entidad. Disponible en: <https://eldiario.com/2026/07/09/recuperacion-servicio-electrico-la-guaira/>

ejecutado, gestión ambiental de escombros y canales de denuncia ante los eventos sísmicos pero al cierre de este informe preliminar, ninguno de los entes ha emitido respuesta.

I. Metodología y alcance

Para la elaboración de este informe preliminar se diseñó una estrategia de recolección de datos mixta, orientada a documentar los datos de información pública en tres temáticas específicas: Salud, servicios básicos y ambiente tras el sismo. La primera fase consistió en la aplicación de tres instrumentos de recolección de información estructurados a través de formularios digitales, los cuales estuvieron activos desde el viernes 17 de julio hasta el lunes 20 de julio de 2026.

Estos cuestionarios fueron dirigidos a tres poblaciones clave: personal de salud, comunidades afectadas y observadores de riesgo ambiental/geológico. En total, se recabaron 37 respuestas distribuidas de la siguiente manera:

Formulario	Población objetivo	Respuesta
Acceso a la información y ambiente Post-Sismo	Observadores de riesgo ambiental/geológico	4
Censura y opacidad hospitalaria post-sismo	Personal de salud	10
Servicios básicos e incomunicación post-terremoto	Comunidades afectadas	23

En el caso del ecosistema de medios la triangulación de la información se realizó desde el 6 hasta el 21 de julio de 2026. El despliegue territorial para la recolección de datos abarcó a los estados Yaracuy, Distrito Capital, Lara, Miranda, Sucre, Aragua y, de manera parcial, La Guaira. La muestra recabada es de carácter preliminar; por lo tanto, las cifras expuestas deben interpretarse como indicativas de patrones de afectación y no como estadísticas representativas a nivel nacional.

Garantías de seguridad digital y confidencialidad

Los instrumentos fueron gestionados bajo estándares de seguridad digital y protección a las fuentes.

II. Hallazgos clave

El análisis de los datos preliminares levantados durante el primer mes del evento sísmico revela un patrón sistemático de opacidad institucional, vulneración al derecho a la información y colapso estructural. A continuación, se resumen los hallazgos claves:

- **Opacidad en la gestión de riesgo ambiental:** el 100% de los consultados denuncia que la información oficial sobre las afectaciones es incompleta o contradictoria. Asimismo, se reporta que el Estado niega sistemáticamente el acceso a datos técnicos a expertos independientes, especialmente en La Guaira (que concentra el 75% de las afectaciones geológicas).

- **Censura e intimidación hospitalaria:** el 70% del personal de salud siente temor a informar por temor a represalias. Además, el 60% de los recintos prohíbe el acceso a la prensa por “órdenes superiores” y el 90% mantiene una total opacidad en la rendición de cuentas sobre compras de emergencia.
- **Afectación de servicios e indefensión informativa:** el 95,7% de los ciudadanos carece de cronogramas públicos de racionamiento eléctrico de CORPOELEC. Los continuos apagones han creado un cerco comunicacional, con más del 56% de la población reportando fallas críticas en internet y telefonía móvil que les impiden el reporte de emergencias y la comunicación con familiares o servicios de ayuda.
- **Restricciones a la documentación ciudadana:** se documenta un patrón de chantaje gubernamental, donde un 17,4% reporta amenazas (incluyendo el retiro de beneficios sociales como las bolsas CLAP) para evitar que difundan fotos de las infraestructuras colapsadas. Esto deja al 91,3% de la población en estado de indefensión informativa.
- **Devastación del ecosistema de medios:** la infraestructura radial sufrió daños críticos. En La Guaira, emisoras como RNV, Enlace RV y Radio Urimare reportan pérdida total de sus sedes. En el estado Carabobo, entre 34 y 40 trabajadores del sector radial resultaron directamente afectados, obligando a emisoras de gran alcance como Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 a iniciar procesos de reubicación por fallas estructurales graves.

A) Acceso a la información y riesgo ambiental/geológico

En el marco de la contingencia ocasionada por el sismo en Venezuela, la evaluación de los riesgos ambientales y el acceso a los datos técnicos oficiales constituyen un requisito ineludible para el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales. Los datos recabados en este componente del diagnóstico evidencian barreras institucionales en materia de transparencia y gestión de riesgos.

En cuanto a la **identificación geográfica de las zonas con mayor riesgo ambiental o geológico derivado del evento sísmico**, el 75% de los registros sitúa la principal afectación en el estado La Guaira, mientras que el 25% restante corresponde al estado Lara. Respecto a la tipología de las afectaciones físicas y ambientales observadas en dichas zonas, predomina con un 50% la presencia de grietas profundas en el suelo o la reactivación evidente de fallas geológicas. Asimismo, se reporta un 25% de afectación por contaminación de fuentes de agua dulce debido a la rotura de tuberías matrices, y un 25% correspondiente a daños estructurales severos en edificaciones públicas, puentes o vías.

En relación con la **transparencia institucional**, ante la consulta sobre si las autoridades ambientales, de infraestructura o de protección civil han publicado mapas de riesgo actualizados, zonas de evacuación obligatoria o informes técnicos sobre estas afectaciones, el 100% de las respuestas coincide en que la información provista es incompleta, contradictoria, de difícil acceso o se encuentra desactualizada.

Por último, en lo que concierne a la **labor de expertos independientes, ingenieros y académicos universitarios para inspeccionar el terreno y evaluar el estado real del**

suelo y las estructuras, el 100% de los consultados señala que, si bien no se impone una prohibición directa de acceso a las zonas, el Estado les niega cualquier dato técnico base indispensable para avanzar en los estudios científicos.

B) Censura, opacidad y restricciones a la información en el sector salud post-sismo

La garantía de los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la transparencia adquiere un carácter crítico en los centros de salud durante la contingencia sísmica. La evaluación realizada en recintos hospitalarios pertenecientes al Distrito Capital (40%), el estado Yaracuy (40%), el estado Lara (10%) y el estado Sucre (10%) arroja una serie de patrones de opacidad institucional, vigilancia y restricciones al trabajo periodístico y de información.

En relación con la **difusión de cifras sobre heridos y fallecidos**, la mayoría de los consultados evidencia la prevalencia de mecanismos no formalizados de censura: el 70% señala que no existe una orden escrita formal, pero **prevalece un temor generalizado** a informar; el 10% reporta la imposición de instrucciones verbales directas para restringir el contacto con la prensa, y un 20% manifiesta que la información sobre víctimas fluye libremente.

Los testimonios advierten que *“siempre está latente el hostigamiento y amenazas al personal de salud”*⁹, lo que ha llevado a los trabajadores a mantener *“una posición de sumisión para evitar cualquier situación de hostigamiento”*¹⁰. En esta misma línea, se reportan medidas de control administrativo como el *“cambio de directiva”*¹¹ y prácticas explícitas de *“censura a la hora de publicar falta de insumos, listas de desaparecidos, información de morgue”*¹².

En el **plano físico e institucional**, el 60% de los centros evalúa que el acceso a periodistas independientes, reporteros gráficos y defensores de derechos humanos es negado por vía administrativa mediante el argumento de “órdenes superiores”. A esto se suma un 10% de casos donde la restricción de acceso y de toma de registro audiovisual es ejecutada directamente por cuerpos de seguridad (GNB, PNB, grupos civiles armados o directivas), mientras que un 30% reporta que los medios ingresan e informan sin inconvenientes.

Respecto a **los ejecutores de estas medidas de bloqueo o prohibición de declaraciones a la prensa**, el 40% corresponde a personal de milicia o seguridad interna del hospital, el 30% a la directiva y autoridades médicas, el 20% a cuerpos de seguridad del Estado (GNB, PNB, SEBIN, DGCIM) y el 10% a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

⁹ Respuesta abierta de formulario digital (Censura y opacidad hospitalaria post-sismo). Recolección de datos, julio de 2026.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

En materia de **agresiones contra la prensa o trabajadores**, el 80% indica que no se han consumado incidentes de decomiso o retención de equipos, mientras que el 20% restante reporta **intentos no concretados de decomiso de material fotográfico o audiovisual**. Asimismo, el 90% señala que hasta la fecha no se han formalizado despidos ni suspensiones laborales contra el personal del centro de salud motivadas por la difusión de información.

La **disponibilidad de información veraz para la localización de pacientes ingresados, heridos o fallecidos muestra deficiencias significativas**. El 40% de las respuestas indica la ausencia total de carteleras o registros públicos, obligando a los familiares a recurrir a contactos internos informales. Un 20% califica la información pública existente como parcial, desactualizada o confusa, y un 40% reporta la existencia de un registro público y ordenado para la ubicación de las víctimas.

En lo relativo al **condicionamiento de la atención médica**, el 60% señala que no se ha suspendido el servicio o los insumos a los heridos a cambio de silencio sobre las condiciones del hospital, aunque se mantiene una vigilancia estricta sobre las entradas y salidas del recinto. El 40% afirma que la atención médica se maneja de forma independiente a los aspectos informativos.

El **acceso a la información presupuestaria y de insumos en los centros de salud** refleja una opacidad casi absoluta. El 90% de los consultados confirmó la ausencia total de reportes técnicos públicos, carteleras informativas o rendición de cuentas sobre la ejecución de recursos presupuestarios extraordinarios o compras de emergencia, mientras que el 10% restante indica que la dirección del centro declaró dichos datos como confidenciales o reservados.

En cuanto al **abastecimiento de material médico-quirúrgico y medicamentos de emergencia**, un 30% denuncia la falta absoluta de inventario en los almacenes técnicos, otro 30% advierte que la entrega de insumos al personal de guardia se encuentra bajo asignación condicionada, un 20% señala restricciones de acceso por resguardo de la directiva, y solo un 20% reporta un suministro regular disponible.

Por último, sobre la **recepción y manejo de ayuda humanitaria o donaciones destinadas a los centros asistenciales**, el 70% manifiesta no haber registrado el arribo ni intentos de entrega de cargamentos humanitarios. Un 10% informa que las donaciones fueron recibidas y almacenadas por la dirección sin la emisión de actas públicas de inventario, y un 20% indica que las organizaciones donantes pudieron entregar los insumos formalmente.

C) Afectación de servicios básicos y cerco informativo post-sismo

La evaluación del acceso a servicios esenciales, midió el impacto del terremoto del 24 de junio en el suministro de telecomunicaciones, energía eléctrica, agua, saneamiento, gas doméstico, aseo urbano y manejo de desechos.

Los datos obtenidos revelan una **sistemática desprotección social y un déficit en la transparencia estatal frente a la contingencia**. El 95,7% de la población consultada

señala no tener acceso a ningún cronograma público de racionamiento por parte de CORPOELEC, lo que imposibilita la planificación ciudadana. A esta política de opacidad se suma la aguda inestabilidad del suministro eléctrico: un 56,5% reporta severas fluctuaciones (“bajones” que ponen en riesgo el escaso patrimonio familiar), mientras que un 21,7% padece apagones prolongados de más de 12 horas, configurando un escenario de privación sostenida de servicios básicos esenciales para la vida digna.

“Pasamos de 7 a 12 horas sin luz y sin acceso al internet, se me dañó el TV, y dos neveras se quemaron y por el poco sueldo aún sin poder acomodar, nadie responde por eso”. Asimismo, estas interrupciones afectan directamente la infraestructura residencial, donde “existen breves cortes de luz que afectan el uso de los ascensores (...) y la información de la alcaldía para solventar esta situación no es clara”.¹³

En materia de **agua potable y saneamiento ambiental**, el evento sísmico profundizó las deficiencias estructurales que ya afectaban al servicio. Los datos reflejan que en el 43,5% de las comunidades consultadas el suministro se mantiene de forma intermitente y sin condiciones de potabilidad para el consumo humano. Asimismo, un 13% de los sectores padece una interrupción total del servicio por tuberías, viéndose obligados a abastecerse de fuentes no seguras (ríos, manantiales o tomas callejeras improvisadas), mientras que otro 13% depende exclusivamente de cisternas privadas ante la falta de un plan de distribución estatal gratuito.

Esta precariedad no es exclusiva de la emergencia reciente, tal como lo afirman los afectados:

“Mi comunidad no sufrió daños estructurales por el terremoto, sin embargo, desde hace años el problema con el agua es constante. Dependemos de camiones cisternas” y advierten que en algunas zonas “tenemos 3 meses sin el vital líquido”.¹⁴

A este escenario de precariedad se suma la **opacidad de los entes responsables**. Ni Hidrocapital (en el Área Metropolitana de Caracas) ni las hidrológicas regionales en el resto de los estados han difundido información sobre la calidad del agua ni sobre planes de distribución alternativa, ignorando formalmente los reportes comunitarios. Por otra parte, un 13% de los consultados señala que, si bien las autoridades emiten comunicados alegando el funcionamiento “normal” de las plantas de tratamiento, dicha información contrasta con la realidad de las comunidades, donde el servicio no llega.

La garantía del **derecho a la comunicación y a la información** se encuentra comprometida tras la contingencia. El 60,9% de los consultados enfrenta una señal móvil intermitente que imposibilita el reporte de emergencias (solo el 21,7% percibe normalidad),

¹³ Respuesta abierta de formulario digital (Servicios básicos e incomunicación Post-Terremoto). Recolección de datos, julio de 2026.

¹⁴ Ibidem.

mientras que el internet fijo opera bajo extrema inestabilidad (56,5%) o se encuentra inoperativo a causa de las fallas eléctricas (30,4%).

“Cuando se va la luz automáticamente quedamos sin señal, es imposible siquiera llamar a alguien” (salvo casos aislados donde operadoras como Movilnet envían alertas de cortes con 30 minutos de anticipación). Esta desconexión *“impide la comunicación inmediata con familiares”* y *“no hay manera de expresar el peligro que corre y mucho menos solicitar ayuda”*.¹⁵

A la precariedad de la infraestructura se suma un patrón de **censura y coerción institucional**. Un 34,8% reporta que las emisoras locales de radio y televisión evitan transmitir información sobre las zonas en riesgo por temor a represalias. Más alarmante aún es la intimidación contra la documentación ciudadana: un 17,4% denunció amenazas directas contra habitantes y líderes comunitarios que intentan documentar la crisis. Estas restricciones incluyen la prohibición arbitraria de fotografiar infraestructuras públicas colapsadas y el uso de beneficios sociales (bolsas CLAP) como herramienta de chantaje, amenazando con su suspensión a quienes difundan información relativa a la emergencia en redes sociales o medios de comunicación.

Las restricciones han limitado también la veeduría sobre las ayudas, en ese sentido la ciudadanía percibe un:

“desvío de información precisa tanto de afectados como de las ayudas”, denunciando que “existe muchos impedimentos por parte gubernamental (...) todo el mundo conoce que hay una necesidad, pero el matraqueo es lo que considero que hace que esa ayuda no llegue”. Al no contar con internet estable, la población *“no permite tener información sobre zonas en peligro y menos información sobre ayuda humanitaria”*.¹⁶

La **garantía de los derechos a un nivel de vida adecuado y a un medio ambiente sano** se encuentra comprometida tras la contingencia sísmica, una situación que se agrava frente a la opacidad institucional. En cuanto al suministro de gas doméstico, si bien un 39,1% de los consultados reporta estabilidad en el servicio, la mayoría enfrenta privaciones significativas: el 39,1% denuncia una distribución altamente irregular caracterizada por el desvío de cilindros o cobros excesivos por parte de actores no estatales; un 17,4% señala la paralización del suministro sin explicaciones oficiales, presuntamente por daños en vía de acceso; y un 4,3% advierte sobre una suspensión total que obliga a las familias a recurrir a la tala y quema de leña, exponiendo los riesgos respiratorios.

Simultáneamente, el **manejo de desechos sólidos refleja un riesgo sanitario inminente**; aunque el 39,1% indica que el servicio opera regularmente, un 47,8% califica la recolección como esporádica e insuficiente frente a la acumulación de escombros, y un 13% padece

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

una paralización total que ha propiciado la creación de vertederos improvisados y focos de insalubridad en áreas residenciales.

Esta desprotección socioeconómica es profundizada por la vulneración sistemática del derecho a la información pública, el 91,3% de la población **se encuentra en estado de indefensión informativa**, ya sea por un **silencio oficial absoluto** respecto a los planes de contingencia (47,8%) o por la circulación de información escasa y basada en rumores (43,5%), contrastando de manera alarmante con apenas un 8,7% de los casos donde las autoridades han publicado cronogramas transparentes y accesibles.

La ciudadanía alerta sobre omisiones en materia de prevención: *“Existen casas con muchas grietas y sin atención de Defensa Civil (...) a escasos 59 pasos tenemos un río y nadie ha realizado una inspección, llueve todos los días y nadie da razones de seguridad”,* concluyendo que *“vivimos en manos de la misericordia de Dios porque las autoridades están en silencio sepulcra”*¹⁷.

Este *“hermetismo comunicacional”*¹⁸ afecta especialmente en las zonas de mayor impacto. Los encuestados denuncian que *“En Yaracuy la falta de información oficial (...) ha tenido como consecuencia un aumento de incertidumbre (...) y se desconoce a nivel nacional la situación de Veroes y Manuel Monge que fueron los epicentros”*¹⁹. **Sin cifras, protocolos ni vocerías**, los ciudadanos quedan aislados, donde *“lo poco que se sabe es por los comentarios de los vecinos”*²⁰, lo que propicia un ambiente crónico de zozobra, desinformación y miedo.

D) Afectación del ecosistema de medios de comunicación en La Guaira y Carabobo, tras los sismos del 24 de junio de 2026

El doblete sísmico del 24 de junio generó un impacto severo en la infraestructura operativa y técnica de los medios de comunicación en los estados La Guaira y Carabobo. El levantamiento preliminar de información, arroja un saldo crítico de inoperatividad, concentrado mayoritariamente en el sector radial.

Impacto general por región:

- **Estado La Guaira:** la vulnerabilidad geológica de la franja costera y la amplificación de ondas en suelos poco consolidados propiciaron el colapso de infraestructuras clave. El sector radial es el más perjudicado, registrando la pérdida absoluta de sedes por derrumbes o incendios (RNV, Enlace RV, Radio Urimare), mientras que otras emisoras permanecen inoperativas o en evaluación por daños severos. En el ámbito de la prensa, *La Verdad de Vargas* mantiene operatividad restringida e híbrida tras sufrir daños en su sede del Casco Histórico.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

- **Estado Carabobo:** la amplificación sísmica en la cuenca del Lago de Valencia comprometió la estabilidad de edificios comerciales y residenciales. Se contabilizan entre 34 y 40 trabajadores del sector radial directamente afectados. A nivel operativo, emisoras de gran alcance como *Éxitos 93.1* y *La Mega 96.5* enfrentan procesos de reubicación obligatoria debido a fallas estructurales en sus instalaciones.

A continuación, se detalla el estatus operativo actualizado del ecosistema de medios evaluado:

Tabla Resumen: estatus de los medios de comunicación afectados

Medio de comunicación	Tipo / Sector	Ubicación geográfica	Estatus actual
La Verdad de Vargas	Prensa escrita y digital	Casco Histórico de La Guaira, estado La Guaira	Operatividad restringida (flujo híbrido y reubicación temporal del personal)
RNV (Dial 107)	Radio	Playa Grande, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida absoluta por colapso total de la sede y antenas)
Radio Coral	Radio	Los Corales, estado La Guaira	Inoperativa (daños estructurales parciales y colapso de la antena)
Voces Antiimperialistas	Radio comunitaria	Los Corales, estado La Guaira	Funcionamiento limitado (impacto moderado en la planta física)
Radio Naiguatá	Radio	Naiguatá, estado La Guaira	En evaluación (compromiso estructural severo)
Enlace RV	Radio	Catia La Mar, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida total por colapso de la edificación, incendio y saqueo)
Radio Urimare	Radio	Urbanismo Hugo Chávez, Urimare, estado La Guaira	Inoperativa (pérdida total por colapso estructural severo del desarrollo habitacional)
Éxitos 93.1	Radio	Estado Carabobo	En proceso de reubicación (daños estructurales en su sede)
La Mega 96.5	Radio	Estado Carabobo	En proceso de reubicación (daños estructurales en su sede)

IV. Conclusiones preliminares

El levantamiento de datos comprendidos del 6 al 21 de julio de 2026 evidencia un patrón sistemático y transversal de opacidad institucional frente a la contingencia sísmica del 24 de junio de 2026, que se manifiesta de manera consistente en los tres ejes evaluados: gestión de riesgo ambiental, sector salud y servicios básicos. En los tres casos, **la constante no es la ausencia puntual de información, sino la negativa reiterada del Estado a producirla, publicarla o entregarla a quienes la solicitan, comunidades, personal de salud, periodistas y expertos independientes**, lo que constituye una vulneración directa al principio de máxima divulgación, a los artículos 143 de la CRBV, artículo 19 del PIDCP y el artículo 13 de la CADH.

La censura documentada no opera, en su mayoría, mediante órdenes formales, **sino a través de mecanismos difusos de intimidación, órdenes verbales y temor a represalias**, lo que la hace más difícil de comprobar jurídicamente sin que esto desestime su veracidad: el 70% del personal de salud consultado teme informar y el 60% de los centros restringe el acceso de la prensa por “órdenes superiores”. **Este patrón se replica en las comunidades**, donde el 17,4% reporta amenazas de retiro de beneficios sociales (CLAP) como forma de disuadir la documentación ciudadana, dejando al 91,3% de la población en un estado de **indefensión informativa**.

La afectación simultánea de electricidad, telecomunicaciones, agua y gas doméstico no solo agrava las condiciones materiales de vida, sino que produce un efecto multiplicador sobre el derecho a la información; la falla en conectividad (más del 56% de los consultados) impide tanto reportar emergencias como acceder a la información oficial que, de existir, tampoco se publica de forma sistemática (95,7% sin cronogramas de racionamiento eléctrico). El resultado es un cerco comunicacional que aísla a la población justo en el momento **en que la información es más indispensable para proteger la vida y la salud**.

A esto se suma un **daño estructural directo a la infraestructura mediática en las zonas de mayor impacto**; la pérdida total de al menos tres sedes radiales en La Guaira y la afectación a periodistas y comunicadores del sector en Carabobo debilitan precisamente los canales que, en un contexto de emergencia, deberían servir de contrapeso a la opacidad oficial.

La consistencia de los patrones indica que la opacidad es casi absoluta en materia presupuestaria (90%), la ausencia de mapas de riesgo actualizados (100%) y el bloqueo del acceso a datos técnicos a expertos independientes (100%), permite afirmar que **se trata de una tendencia estructural y no de hechos aislados**. Espacio Público reitera que, al cierre de este informe, **ninguna de las peticiones formales de información dirigidas a los ministerios de Salud y Ecosocialismo ha sido respondidas**, lo cual confirma el patrón de hermetismo descrito.

Este **informe preliminar** incorpora un anexo que sintetiza los indicadores cuantitativos de lo registrado durante el mes de contingencia en cuanto al derecho de acceso a la información pública **en contraste con los patrones de opacidad documentados durante este primer mes de monitoreo**.

